

COLABORACIÓN ESPECIAL

Derechos universales y subsidios focalizados

MAGDY MARTÍNEZ-SOLIMÁN

Esta es en cinco palabras la propuesta que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le hace a México en su 50 aniversario en el país, y en la segunda década, a nivel mundial, de que el índice y el Informe de Desarrollo Humano se convirtieran en las mediciones universalmente aceptadas para valorar el progreso social de las naciones. En estas dos buenas efemérides, presentamos hace unos cuantos días junto al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, así como Marco Antonio Paz Péllet, María Amparo Casar, Edna Jaime, Rolando Cordera y Rodolfo de la Torre, un diagnóstico para el futuro.

Pero empezamos por el principio, la constatación ineludible de los altos niveles de desigualdad imperantes en el país. Latinoamérica es la región más desigual del mundo, y dentro de ella, México no escapa a los rasgos predominantes en la zona. La pregunta es: ¿ha conseguido el Estado mexicano mejorar esta situación, haciendo que el gasto público equilibre lo que el mercado no había conseguido por sí solo? Gracias a la intervención del Estado a lo largo del siglo XX, México transitó de una tasa de analfabetismo de 80% a otra de 10%; de una tasa de mortalidad infantil de 25% a una tasa menor al 2%; de una esperanza de vida al nacer de apenas 30 años, a una de 75 años. Este progreso social sin parangón en la historia se vincula indisolublemente con el gasto en educación, en salud y en seguridad social.

En ese devenir, y hace ya décadas, México dejó de ser un país subdesarrollado, para convertirse en una de las economías emergentes y en una de las naciones de renta media del mundo. Esto no es porque en México no haya pobres, sino porque, a diferencia de los países más pobres del planeta, sí hay una clase media numerosa de empleados, servidores públicos, profesionales, trabajadores, pequeños propietarios, empresarios y comerciantes, que equilibran las cifras hacia el espacio intermedio, situando a México entre el centenar de países pobres y muy pobres, y el medio centenar de países prósperos y muy prósperos. Esas clases medias mexicanas obtienen para sí y para sus familias un ingreso decente, y el Estado les garantiza salud y educación. Podemos por lo tanto decir con cierto optimismo que México es ya un país de renta media. Y podemos también decir con ansiedad que todavía no alcanza a los países más avanzados. Hay una condición dual en la que el país va avanzando, y con él, la mitad o más de su población, mientras existen riesgos serios de descuelgue y exclusión de 40% de la sociedad mexicana. Por eso Méxi-

co no es aún un país de desarrollo humano muy alto. Pero su potencial contiene la esperanza de que puede llegar a serlo relativamente pronto, como consiguieron dar ese salto en apenas dos o tres décadas países como Suecia, Corea o España.

En Desarrollo Humano, México compara con Chile, Kuwait, Arabia Saudita, Rumanía, Malasia, Uruguay, Rusia o Argentina, mientras que se sitúa por encima de Costa Rica y muy por encima de Brasil. No compara ya con Tailandia, Filipinas, Egipto o Indonesia, Vietnam, Marruecos, Sudáfrica o la India. Ello en nada disminuye la urgencia de ir reduciendo una pobreza lacerante y evidente: México, precisamente por el éxito de su economía emergente, tiene los recursos internos necesarios para superar la pobreza. El país sigue estando en transición y se ha ido acercando a los países más desarrollados del planeta, garantizando una extensa esperanza de vida, universalizando gradualmente los derechos y los servicios de educación y salud, y aumentándose el ingreso directo de muchos millones de mexicanos y mexicanas.

Veamos algunos datos respecto de la educación. Sabemos que el precio de su universalización ha sido la calidad. El gran elemento igualador son las becas, que son más progresivas para las mujeres y en el ámbito rural que en las ciudades y para los muchachos. México gasta más proporción de presupuesto público en educación que los países de su entorno o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero gasta menos proporción de su riqueza nacional en educación que estos países con los que se compara. Y en resumidas cuentas, aunque hace un esfuerzo presupuestario enorme, gasta menos dinero, y lo gasta en salarios.

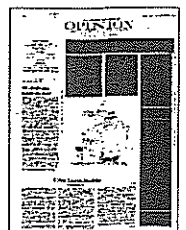
Respecto de la salud, se está haciendo un esfuerzo de inversión histórico. En la década, mientras creció 70% el gasto público en salud para la población asegurada, creció en 264% para la población no asegurada, es decir, para las familias más necesitadas. El dato más importante tal vez sea que en México se ha registrado una reducción de la incidencia de hogares que enfrentan gastos empobrecedores por motivos de salud, los llamados gastos catastróficos por enfermedad o tratamiento, que padecía fundamentalmente la población no asegurada. Pero 50% del gasto que se hace en salud en México sigue siendo privado, lo que indica que queda mucho espacio de salud pública por cubrir.

No hacen falta grandes análisis para demostrar que los subsidios generalizados son altamente inequitativos, como lo son los impuestos indirectos al consumo. Siguen la misma lógica de aplicar soluciones idénticas a necesida-

des desiguales. México gasta cada año cuatro veces más en subsidiar el combustible que en todos los programas para combatir la pobreza. Y aunque en abstracto está bien que una economía petrolera incentive sus costos de producción con hidrocarburos muy competitivos, la cuestión es saber si México se lo puede permitir, y si a la vista de las fracturas sociales no habría que dar la vuelta a la ecuación y gastar cuatro veces más en combatir la pobreza que en abaratar las gasolinas.

La Cámara de Diputados aprueba transferencias de 40% de los recursos presupuestarios a 20% de la población más rica el país. Los trabajadores de una empresa paraestatal altamente subsidiada reciben más de 17 mil 500 pesos mensuales de apoyo gubernamental a su pensión, mientras que a los adultos mayores en zonas rurales se les otorgan, en un modo de pensión no contributiva, 175 pesos, es decir, 100 veces menos. El 80% de los apoyos públicos al campo se otorga, a pesar de correcciones recientes, a 10% de los productores con más tierra, porque se otorgan a la producción y a la superficie. Sin duda, Procampo no es un instrumento para reducir la pobreza, y no debería ser juzgado según este parámetro. Sin duda, Procampo era el paraguas de protección imprescindible de la agricultura mexicana ante el TLC. Pero si se quieren reducir los niveles de desigualdad con un presupuesto necesariamente limitado y sin producir endeudamiento, las prioridades tienen también que ordenarse para que grandes transferencias de recursos no sólo cumplan funciones de competitividad, sino también de equidad.

Termina el informe analizando el gasto público en las entidades federativas, donde la triste realidad de las transferencias del ramo 33 es que han paralizado el crecimiento de los ingresos propios estatales, e incluso desincentivado el esfuerzo fiscal de los municipios, a 10 años de su creación. Es una mala situación aquella en la que, por recibir transferencias federales, las haciendas locales dejan de hacer su parte de la tarea recaudatoria. Un gobierno que no cobra impuestos es un gobierno menos sometido a la obligación de rendir cuentas. El informe, como otros anteriores del PNUD, se pronuncia sobre un asunto de actualidad en materia de reforma política, en la dirección de profundizar una democracia de



ciudadanía; para que los legisladores mantengan un vínculo de responsabilidad con los ciudadanos; para que puedan influir sobre los asuntos presupuestarios y balancear al Poder Ejecutivo se hace muy positiva la propuesta de la reelección legislativa inmediata.

El gasto público necesita mayor transparencia

en el planteamiento y en el ejercicio. Este informe propone un paquete básico universal no contributivo: eliminar subsidios generalizados al consumo y sustituirlos con subsidios focalizados, y orientar la atención hacia la equidad en el ejercicio de los derechos sociales básicos. En resumen, el costo de una educación con problemas de calidad, de una seguridad social que en-

carece el trabajo formal y subsidia la informalidad, y de los subsidios generalizados, puede estar en el origen de que la economía mexicana no crezca como podría y de que la pobreza en México no decrezca como debería.

*Representante residente
del PNUD México*